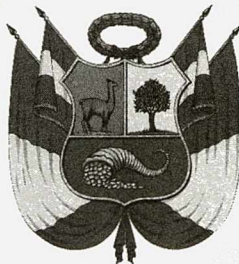


REPUBLICA DEL PERU

102-2022-DFIS/DIGESA/SA



# Resolución Directoral

11

marzo

2022

Lima, ..... de..... del.....



**VISTO**, el expediente N° 38534-2018-PAS del administrado **DELGADO DIAZ VIRGILIO**, identificada con RUC N° 10410251421, en adelante el administrado y el Informe N° 963-2022/DFIS/DIGESA, de fecha 03 de marzo del 2022, sobre la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, en adelante PAS, en el área de Sanción de la Dirección de Fiscalización y Sanción, en adelante DFIS, de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria-DIGESA, y;

## CONSIDERANDO:

Que, el 19 de marzo 2018, personal de la Dirección Regional de Salud de Lambayeque (en lo sucesivo, DIRESA Lambayeque), se apersonó al establecimiento del administrado **DELGADO DIZ VIRGILIO**, (en adelante, la administrada), identificado con RUC N° 10410251421, ubicado en **Mz. D, Lt. 03, CPM Santa Ana, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque**, a fin de verificar las condiciones higiénicas sanitarias de su local de fabricación y el cumplimiento de la norma sanitaria vigente, utilizando para ello, el "Acta Ficha N° 07 – Acta de Inspección Sanitaria para la Certificación de Principios Generales de Higiene", y el "Acta de Acontecimientos y Vigilancia Sanitaria";

Que, seguidamente, con fecha 04 de abril de 2018, mediante Oficio N° 000650-2018-GR/LAMB/GERESA-L [2731213-7] [expediente N° 15485-2018-DRS], la DIRESA Lambayeque, remitió a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, (en adelante, la DIGESA), el Informe N° 000028-2018-GR.LAMB/GERESA-L-DESA-JMAJ [2731213-6], mediante el cual recomienda ratificar la medida de seguridad dispuesta de : **SUSPENSION TEMPORAL DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y COMERCIO DE ALIMENTOS** contra el administrado, así como, decomisar y eliminar todo alimento terminado, materia prima o insumo que se encuentre en el establecimiento como medida complementaria;

Que, con fecha **06 de agosto de 2018**, mediante **Memorándum N° 361-2018/DCOVI/DIGESA**, la Dirección de Control y Vigilancia de la DIGESA, (en adelante, la DCOVI), remitió a la Dirección de Fiscalización y Sanción (en adelante, DFIS), el expediente N° 15485-2018-DRS, conjuntamente con el Informe N° 2212-2018/DCOVI/DIGESA, respecto a la vigilancia sanitaria, en donde se concluye que la GERESA Lambayeque, dispuso la medida de seguridad de 2731213-6], mediante el cual recomienda ratificar la medida de seguridad dispuesta de: **SUSPENSION TEMPORAL DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y COMERCIO DE ALIMENTOS** al establecimiento del administrado, asimismo, concluye que, el administrado, no aplica los Principios Generales de Higiene, ni cuenta con la Validación del Plan HACCP;





Que, en esa misma línea, con fecha 05 de diciembre de 2018, a través del **Auto N° 167-2018/AI/DFIS/DIGESA/SA**, sustentando en el Informe N° 3316-2018/AI/DFIS/DIGESA, de fecha 04 de diciembre de 2018, la Autoridad Instructora de la DFIS, decidió iniciar procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) contra el administrado **DELGADO DIZ VIRGILIO**, por la presunta comisión de las infracciones administrativas tipificadas en los literales **a), b), c), d), e), f), g), k) y m) del artículo 121°** del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias, hecho que fue notificado a la referida con **fecha 08 de noviembre de 2019**, cuyo documento fue recibido por la esposa del administrado, la señora Lucrecia Armijos Huamán;

Que, asimismo, con fecha 12 de diciembre de 2018, mediante el **Auto Directoral N° 133-2018/DFIS/DIGESA/SA**, sustentado en el Informe N° 3341-2018/DFIS/DIGESA, de fecha 05 de diciembre de 2018, la DFIS, ratifico la medida de seguridad de **SUSPENSION TEMPORAL DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION Y COMERCIO DE ALIMENTOS** y dispuso la medida complementaria de **SUSPENSION TEMPORAL DEL REGISTRO SANITARIO** para el producto: 1) Maíz expandido – maíz expandido “NEGOCIOS DELGADO”, con código N° E7312014N/MADLDA, hasta que el administrado demuestre y garantice el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, y bajo la verificación de la Autoridad Sanitaria;

Que, mediante el **Oficio N° 1037-2019/AI/DFIS/DIGESA**, recibido el 30 de octubre de 2019, la DFIS, solicitó a la DIRESA Lambayeque, gestione y haga efectiva la notificación del Auto N° 167-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA, del Informe N° 3316-2018/AI/DFIS/DIGESA, el Auto Directoral N° 105-2019/DFIS/DIGESA, y el Informe N° 3314-2018/DFIS/DIGESA, dirigidos al administrado, en su domicilio ubicado **Mz. D, Lt. 03, CPM Santa Ana, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque;**

Que, en virtud de ello, el 22 de noviembre de 2018, mediante el Oficio N° 003105-2019-GR.LAMB/GERESA-L [3365944-2] [expediente N° 38534-2018-PAS], la GERESA Lambayeque, remitió a la DFIS, el Informe Técnico N° 000048-2019-GR.LAMB/GERESA-L-DESA-JMAJ [3365944-1], sobre la notificación del Auto Directoral N° 105-2019//AI/DFIS/DIGESA/SA, y su informe que lo sustenta, y el Auto N° 167-2019/AI/DFIS/DIGESA, y su informe que lo sustenta, dirigidos al administrado, efectuado el 08 de noviembre de 2019, en su domicilio consignado según el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil – RENIEC;

Que, luego de ello, se aprecia que el Informe Final de Instrucción N° 3582-2019/AI/DFIS/DIGESA, de fecha 30 de diciembre de 2019, el cual concluye que, el administrado, incurrió en la comisión de infracciones administrativas tipificadas en los literales a), b), c), d), e) y m) del artículo 121° del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatoria, proponiendo sancionarlo con una multa equivalente a **TRECE (13) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)**. Asimismo, señala que, respecto al incumplimiento del literal m) del artículo 121° del Reglamento, referido a no contar con la Certificación de la Validación Técnica del Plan HACCP, se propone sancionarlo con amonestación;

Que, seguidamente, respecto al Informe Final de Instrucción, se llegó a notificar mediante el **Oficio N° 237-2020/DFIS/DIGESA**, de fecha 14 de julio de 2020. En tal sentido, dan cuenta el Informe de Macro Post N° 846-97004-2 de fecha 13 de julio de 2020, en el cual se indica que: “**no hubo nadie**”, se dejó aviso, asimismo, se aprecia el Informe de la empresa Macro Post N° 846-97004-2 de fecha 14 de julio de 2020, en el cual se indica que: “ausente”, se precedió a dejar bajo puerta, por otro lado, de los actuados se observa el Informe Técnico N° 45-2020-GR.LAMB/GERESA-L-DESA-JMAJ (3609831-2) de fecha 01 de octubre de 2020, (expediente N° 38534-2018-PAS), el cual concluye que, **el 25 de setiembre de 2020**, se entregó el Informe Final Instrucción N° 3582-2019/AI/DFIS/DIGESA, de fecha 30 de diciembre de 2019, al administrado;

Que, finalmente, mediante la Resolución Directoral N° 206-2020/DFIS/DIGESA/SA, de fecha 27 de octubre de 2020, la DFIS, resolvió sancionar al administrado, por incumplir el Reglamento Sanitario, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias, hechos sobre los





102-2022-DFIS/DIGESA/SA

# Resolución Directoral

11

marzo

2022

Lima, ..... de..... del.....



cuales, se notificó recién en la segunda visitada realizada en el domicilio del referido, conforme a lo regulado en el numeral 21.5 del artículo 21° del TUO de la LPAG, dejando consta de ello;

## LA CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Que, en los procedimientos administrativos iniciados de oficio, como el procedimiento administrativo sancionador, el decurso del tiempo aunado a «[La inactividad de la administración produce dos efectos favorables al particular: por un lado (...) la prescripción de las infracciones; y, por otro, la caducidad del procedimiento ya iniciado (o perención)]»<sup>1</sup>. La prescripción siempre tuvo reconocimiento en el ordenamiento administrativo general; sin embargo, la caducidad, a pesar de su utilidad práctica, no había sido objeto de atención por el legislador. El 21 de diciembre de 2016, con la publicación del Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo<sup>2</sup> se optó por incorporarla;

Que, conforme a la doctrina española<sup>3</sup>, la caducidad es aquella institución jurídica que de producirse (por el mero transcurso del tiempo) inhabilita legalmente a la Autoridad Administrativa para proseguir con el procedimiento administrativo sancionador iniciado, sin importar la etapa en que se encuentre, o para exigir la sanción decidida, pero no notificada oportunamente. En ese sentido, la caducidad constituye una figura jurídica que determina el tiempo máximo dentro del cual se debe instruir y resolver -que incluye notificar- un procedimiento sancionador. Dicho planteamiento doctrinal se positivizó en el artículo 237-A de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, incluido en el Decreto Legislativo N° 1272, que establece como tiempo máximo para la conducción de los procedimientos sancionadores el plazo de nueve (09) meses, más tres (03) meses de ampliación en casos excepcionales. Vencido dicho término sin emitirse pronunciamiento debidamente notificado opera la caducidad, **consecuentemente, corresponde archivar el procedimiento sancionador en trámite**. No obstante, el referido dispositivo legal deja abierta la posibilidad para que a través de leyes especiales las entidades regulen un plazo mayor o menor al indicado;

Que, ahora bien, mediante el Decreto Legislativo N° 1452, se modificó la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, entre los cuales se encuentra el artículo 237-A de la acotada ley, referido a la caducidad del procedimiento administrativo sancionador, debiendo precisar que este artículo, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante el Decreto

<sup>1</sup> NIETO GARCÍA, Alejandro. *Derecho administrativo sancionador*. Quinta edición. Madrid: Editorial Tecnos, 2012, p. 550.

<sup>2</sup> Publicado el 21 de diciembre de 2016 en el diario oficial El Peruano, en consecuencia, vigente desde el día siguiente.

<sup>3</sup> GÓMEZ TOMILLO, Manuel y SANZ RUBIALES, Iñigo. *Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría General y Práctica del Derecho Penal Administrativo*. Segunda edición. Pamplona: Editorial Arazandi S.A., 2010, p. 771.



Supremo N° 004-2019-JUS, actualmente se encuentra ubicado en el artículo 259, en el que se establece:

**«Artículo 259.- Caducidad del procedimiento sancionador**

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad no aplica al procedimiento recursivo.  
Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este.
2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procederá a su archivo.
3. La caducidad es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio.
4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado no interrumpe la prescripción». (él énfasis es nuestro).
5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador." (Numeral incorporado por el Decreto Legislativo N° 1452.)

Que, esto quiere decir, que todos aquellos procedimientos administrativos sancionadores que fueron iniciados con posterioridad a la fecha de publicación del Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, cuentan con nueve (09) meses desde la fecha de notificación de la imputación de cargos para ser resueltos definitivamente. Sin embargo, este plazo puede ser ampliado excepcionalmente por tres (3) meses adicionales, para lo cual el órgano competente deberá emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento;

**SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS**

Que, al respecto, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 15 de marzo del 2020, se dispuso la suspensión por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación, referidos al cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentran en trámite desde su entrada en vigencia, con excepción de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados. Asimismo, se observa que el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 dispuso la suspensión por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicación del referido [Decreto de Urgencia] de los procedimientos administrativos de cualquier índole, es decir, alcanza a los procedimientos administrativos sancionadores;

Que, en esa línea, mediante Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 28 de abril de 2020, se dispone la prórroga del plazo de suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo al amparo del numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020 (publicado el 16 de marzo de 2020), Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, por el término de quince (15) días hábiles contados a partir del 29 de abril del 2020 hasta el 20 de mayo del 2020;

Que, ahora bien, el 05 de mayo del 2020, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano", el Decreto de Urgencia N° 053-2020 "Decreto de Urgencia que otorgó un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del





102-2022-DFIS/DIGESA/SA

# Resolución Directoral

11

marzo

2022

Lima, ..... de..... del.....



Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19 y dicta otras disposiciones", cuyo artículo 12 señala que la prórroga por el término de quince (15) días hábiles, de la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentran previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, se cuenta a partir del 7 de mayo del 2020;



Que, finalmente, a través del Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 20 de mayo del 2020, se decretó prorrogar **hasta el 10 de junio del 2020** la suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente norma, regulado en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, y ampliado por el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM;

Que, del mismo modo, se decretó prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia N° 053-2020;

## **SOBRE LAS ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR**

Que, en virtud de ello, debemos advertir que conforme a los actuados en el presente expediente administrativo **N° 38534-2018-PAS**; en lo seguido contra el administrado **DELGADO DIAZ VIRGILIO**, la Dirección de Fiscalización y Sanción, a través del Auto N° **167-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA**, sustentado en el Informe N° 3316-2018/AI/DFIS/DIGESA, de fecha 04 de diciembre del 2018, resolvió iniciar el procedimiento administrativo sancionador, en vista de los incumplimientos detectados en contra la normativa sanitaria vigente, cuyos documentos fueron debidamente notificados con **fecha 08 de noviembre de 2019**, en el domicilio ubicado **Mz. D, Lt. 03, CPM Santa Ana, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque**; de acuerdo a lo regulado en el numeral 21.1 del artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444;

Que, asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el TUO de la Ley N° 27444, la norma señala que, el plazo de caducidad de los procedimientos administrativos sancionadores tiene un periodo de **nueve (09) meses, contabilizados desde la notificación del acto de imputación de cargos**; con el fin que la Autoridad Sanitaria resuelva el procedimiento administrativo iniciado de Oficio;



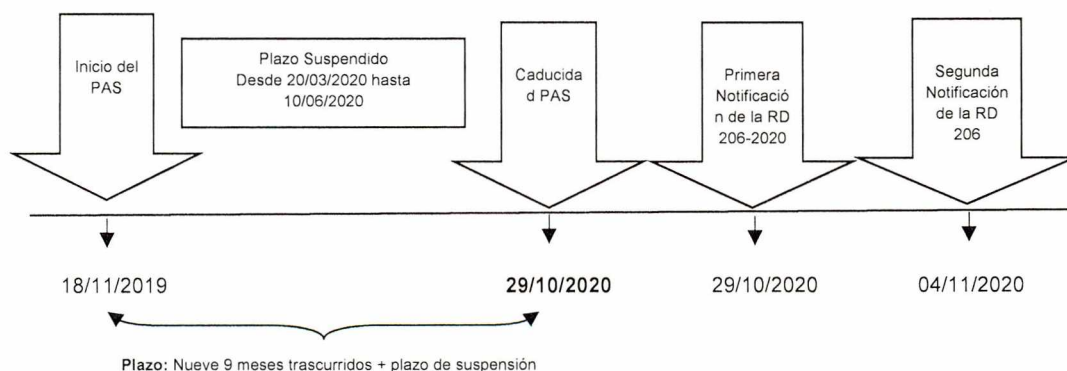
Que, en el presente caso, se aprecia que, la Dirección de Fiscalización y Sanción - DFIS; tuvo como plazo en principio hasta el **08 de agosto del 2020**, a fin resolver el precitado procedimiento administrativo sancionador en contra de la administrada;

Que, no obstante, es necesario advertir que, desde la interrupción del plazo [21 de marzo hasta el 10 de junio del 2020] para los procedimientos de cualquier índole, entre ellos el procedimiento sancionador, se entiende que, dicho plazo, el cual fue de **[2 meses y 3 semanas]** no fue computado para la configuración del plazo de caducidad transcurrido hasta el momento, debiendo tenerse en consideración que estos días [plazo suspendidos], deben ser contabilizados a partir del **08 de agosto del 2020**, teniendo que agregarse los dos meses, tres semanas y cuatro días, teniendo como nuevo plazo hasta el **29 de octubre del 2020**, tiempo en el que, la Autoridad Sanitaria debió emitir su pronunciamiento final sobre el procedimiento administrativo sancionador;

Que, en vista de ello, se aprecia que, desde la notificación del acto de imputación de cargos; más lo agregado respecto a la suspensión de plazos para la tramitación de procedimientos administrativos por el Estado de Emergencia, conforme a Ley, se verificó que, el referido procedimiento administrativo caducó **indefectiblemente el día 29 de octubre del 2020**, observándose que, la Autoridad Sanitaria culminó el procedimiento sancionador seguido, a través de la emisión de la Resolución Directoral N° 206-2020/DFIS/DIGESA, sustentada en el Informe N° 2011-2020/DFIS/DIGESA; sin embargo, en dicha diligencia de notificación no pudo ser llevada a cabo en el tiempo oportuno, pese a que se trató de notificar la referida resolución directoral, observándose que, de los cargos de notificación realizados en el domicilio del administrado, se verificó que las visitas realizadas por el personal de la DIRESA Lambayeque, fueron con **fecha 29 de octubre de 2020 [primera visita] y con fecha 04 de noviembre de 2020 [segunda visita]**, tal como consta de los actuados en el expediente administrativo, por lo que, hasta ese momento [última visita], el plazo para resolver el procedimiento sancionador **ya se encontraba caducado conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;**

Que, en consecuencia, en el presente PAS, se advierte que, a la fecha se ha excedido el plazo máximo para emitir pronunciamiento por parte de Autoridad Sanitaria, **por haber transcurrido los 09 meses, incluidos el plazo de suspensión declarado por el Estado de Emergencia por el COVID-19**, conforme consta en el expediente, asimismo, **tampoco se aprecia que, la DFIS, haya optado por ampliar dicho plazo excepcionalmente por tres meses de manera justificada conforme a la ley**, por lo tanto; solo cabe proceder a **DECLARAR LA CADUCIDAD** del referido procedimiento administrativo sancionador, conforme a lo señalado en el **artículo 259° del TUO de la LPAG;**

Que, en virtud de ello, y con la finalidad de tener más detalle al respecto, precisamos lo indicado en el presente gráfico:



Que, asimismo, y de la revisión de los actuados, se verificó que la Dirección de Fiscalización y Sanción, aún tiene competencia para pronunciarse respecto a las posibles infracciones en las que hubiera incurrido la administrada; conforme se verifica desde la última Acta Ficha N° 07, "Acta de





102-2022-DFIS/DIGESA/SA

# Resolución Directoral



11

marzo

2022

Lima, ..... de..... del.....

Inspección Sanitaria para la Certificación de Principios Generales de Higiene", realizado con fecha **19 de marzo del 2018**; en el establecimiento ubicado en **Mz. D, Lt. 03, CPM Santa Ana, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque**; por lo que, correspondería ser materia de evaluación por parte de la Autoridad Instructora de la DFIS, al no encontrarse dentro de los alcances del plazo de prescripción regulada en el numeral 1) del artículo 252° del TUO de la LPAG, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;



Que, finalmente, y de conformidad con lo establecido en el numeral 5) del artículo 259° del TUO de la LPAG, señala que, la caducidad administrativa del presente procedimiento administrativo sancionador; **no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización realizados, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente, así también las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas**, de ser el caso, se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego del cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza;

Que, con el visado del Coordinador del Área de Sanción de la Dirección de Fiscalización y Sanción; y;

De conformidad a lo establecido en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1161; el Decreto Supremo N° 008-2017-SA – Reglamento Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA; la Ley N° 26842 – Ley General de Salud; el Reglamento Sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias; y el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** – Declarar la **CADUCIDAD** del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el administrado **DELGADO DIAZ VIRGILIO**, con RUC N° 10410251421, iniciado mediante **Auto N° 167-2019/AI/DFIS/DIGESA/SA** y notificado con **fecha 08 de noviembre del 2019**, por haber excedido el plazo máximo para emitir pronunciamiento conforme a lo previsto en el artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en consecuencia, corresponde disponer el **ARCHIVO** del expediente administrativo tramitado bajo el expediente N° **38534-2018-PAS**.

**ARTÍCULO SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO** la Resolución Directoral N° 206-2020/DFIS/DIGESA/SA, de fecha 27 de octubre de 2020, debido a la constatación de plazos advertidos respecto a la notificación del precitado acto administrativo en el domicilio del administrado.

**ARTÍCULO TERCERO. – COMUNICAR** a la Oficina de Cobranza y Ejecución del Ministerio de Salud respecto a lo resuelto en la precitada Resolución Directoral, a fin de tener en cuenta al momento de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva en contra del administrado.

**ARTÍCULO CUARTO. - REMITIR** el presente expediente administrativo a la Autoridad Instructora de la Dirección de Fiscalización y Sanción, para que actúe de acuerdo a sus atribuciones, de conformidad con el numeral 4 del artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, pudiendo también evaluar nuevas acciones de fiscalización si lo fuera necesario.

**ARTÍCULO QUINTO. - INFORMAR** al administrado que, de considerarlo pertinente, podrá autorizar que se le notifique vía correo electrónico los actos administrativos emitidos en el marco del presente procedimiento, para lo cual deberá fijar en su escrito de descargos la respectiva dirección de correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

**ARTICULO SEXTO. – NOTIFICAR** al administrado **DELGADO DIAZ VIRGILIO**, en el domicilio ubicado en **Mz. D, Lt. 03, CPM Santa Ana, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque;** conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

**Regístrese y Comuníquese**

  
MINISTERIO DE SALUD  
Dirección General de Salud Ambiental  
e Inocuidad Alimentaria  
DIGESA  
.....  
ROLAND ALEX IPARRAGUIRRE VARGAS  
Director Ejecutivo  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN